



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS MAYO 2023

El nuevo escenario político

La reciente elección del consejo constituyente dibujó un nuevo mapa político en el país. Con la emergencia del partido republicano como la primera fuerza política, desplazando a Chile Vamos como la fuerza hegemónica en la derecha. El centro político tiende a desaparecer, con la severa derrota sufrida por la lista Todos por Chile, que reunía al PPD, PRSD y la DC, que se proponía recuperar un voto moderado o de centro y que no alcanzara a elegir a ningún consejero.

Algo similar ocurrió con el partido de la gente, cuyo electorado pareció volcarse hacia los republicanos. Explicado, en buena medida, por su proceso de descomposición y disputas internas, alcanzando a su líder natural, severamente cuestionado por los propios dirigentes de su partido.

Por su parte, la lista oficialista, que sumaba a Apruebo Dignidad y el partido socialista, si bien tuvo un buen desempeño electoral, subiendo la votación alcanzada en la convención, no logró el objetivo de elegir la cantidad de consejeros para tener derecho a veto en el consejo constituyente.

Es más que evidente que la decisión de enfrentar esta elección en listas separadas por parte del oficialismo conspiró en contra de la elegibilidad de sus candidatos. En su conjunto, el oficialismo obtuvo un porcentaje de votos similar a los alcanzados por el apruebo en el anterior plebiscito y una sola lista podría haber posibilitado alcanzar el umbral de los 21 consejeros.

Ello representa una clara y contundente derrota para el oficialismo, que tan sólo puede aspirar a jugar un disminuido rol en el consejo constituyente y naturalmente limita el espacio de maniobra del gobierno para hacer avanzar su agenda de reformas.

Diversas razones pueden contribuir a explicar esta derrota y el notable avance de los republicanos, pero todo apunta a que el tema de la seguridad ciudadana y la crisis

migratoria, en las que la derecha basó buena parte de su campaña, están en la base de la contundente victoria de la ultraderecha, no tan sólo en los sectores acomodados sino también en los sectores populares, que demandan mano dura en contra de la delincuencia y rechazan a la inmigración ilegal.

Y tal como lo expresáramos en el informe anterior, a ello debe sumarse el descrédito de la política y la pérdida de confianza en las instituciones. Una crisis que viene de lejos, pero que plantea más de un desafío para los diversos sectores políticos de cara al futuro.

No es para nada evidente que la mayor cuota de responsabilidad por esta derrota sea del gobierno que, a diferencia del anterior proceso, jugó un rol más bien prescindente en la reciente campaña. Es muy discutible que el gobierno no haya logrado precisar una agenda clara, como insinuara la presidenta del PPD. Lo que no tiene es una mayoría que permita viabilizarla. Pese a la intensa campaña de descrédito desplegada por la oposición, con el entusiasta concurso de los poderes fácticos (incluyendo a los medios de comunicación), el gobierno mantiene niveles de aprobación muy cercanos al porcentaje electoral representado por el oficialismo.

El futuro del proceso constituyente

Tras el resultado de la elección del consejo constituyente, no hay demasiadas razones para albergar el optimismo de que el nuevo proceso constituyente pueda llegar a buen puerto, pese al notable trabajo desarrollado por la comisión de expertos designada por el parlamento, que alcanzó importantes grados de consensos en torno al anteproyecto de nueva constitución que deberá ser debatido por el consejo constituyente que inicia sus funciones en este mes de junio.

El senador Rojo Edwards, acompañado de algunos consejeros republicanos que le son cercanos, han expresado sus críticas y diferencias con el anteproyecto elaborado por los expertos, afirmando que se debía modificar sustancialmente durante su tramitación. Todo ello en consonancia con contradictorias declaraciones de algunos de los consejeros republicanos y las críticas declaraciones de algunos de sus parlamentarios respecto del tema de los bordes o principios establecidos como marco del nuevo proceso.

En verdad, Chile Vamos, que tan sólo logró elegir 11 consejeros, en tanto que los republicanos eligieron 23 (reducidos a 22 tras la renuncia de un consejero republicano antes de asumir), enfrentan un verdadero dilema a la hora de definir sus posturas al interior del nuevo consejo. Es cierto que sumados los consejeros republicanos y de Chile Vamos, la derecha tiene mayoría para imponer sus propuestas, pero ello puede hacer fracasar el proceso y generar un nuevo rechazo a la propuesta de nueva constitución.

Tanto Chile Vamos como diversos poderes fácticos (empresarios, medios de comunicación) han llamado a los republicanos a la responsabilidad, asumiendo que se

requiere de consensos amplios, que permitan elaborar un proyecto que pueda ser aprobado por una mayoría ciudadana, pero no es para nada evidente que prime el mismo espíritu de diálogo y búsqueda de consensos que presidió el trabajo de los expertos, en materias tan sensibles como el estado social y democrático de derechos, sancionado por unanimidad por el comité de expertos. Incluido el representante de los republicanos, Carlos Frontaura.

Por su parte, José Antonio Kast, el gran triunfador de la jornada electoral y el candidato mejor posicionado en la derecha para optar a la presidencia de la república, está más que consciente que en el nuevo proceso constituyente se juega su liderazgo y se mide en su capacidad de asegurar la gobernabilidad futura del país.

Al interior de Chile Vamos las opiniones están fuertemente divididas en torno a la alternativa de recomponer su alianza con los republicanos, que tiene mayor fuerza en la UDI, o, por el contrario, buscar un rol moderador o de puente entre el oficialismo y los republicanos. Incluso el senador Manuel José Ossandón plantea que su partido, Renovación Nacional, debe abandonar Chile Vamos para competir por la hegemonía y el liderazgo de la derecha.

Con mucho, la disyuntiva trasciende el tema constituyente para proyectarse al ámbito de la política y el rol que debe jugar la oposición frente a la agenda gubernamental. “El gobierno no puede pretender que nada ha cambiado tras estas elecciones” han sostenido diversos líderes de la oposición y no pocos dirigentes empresariales. Debe resignar su agenda de reformas y buscar acuerdos con la oposición, que permitan viabilizar su agenda legislativa. Los presidentes de la UDI y RN fueron un poco más lejos. Públicamente le solicitaron al ministro de hacienda que desistiera de subir los impuestos, asumiendo que, con los ingresos del litio y el nuevo royalty minero, además de “eficientar” (reducir) el gasto, contaban con recursos más que suficientes para implementar su programa social. Y han notificado que no están sus votos para aprobar la reforma del sistema previsional.

Los dilemas del gobierno tras la derrota

Es más que evidente que el gobierno con cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar su ambiciosa agenda de reformas. Y debe negociar con diversos sectores de la oposición. Así lo asumió públicamente la ministra del interior al expresar que el gobierno no esperaba obtener todo lo que proponían y que debían buscar acuerdos con la oposición.

Eso es una cosa. La otra es una suerte de rendición incondicional, como pretenden algunos sectores de la derecha. Bajar y no subir los impuestos, como proponen los republicanos, mantener incólume el sistema de capitalización individual en materia previsional, asegurar la sobrevivencia de las ISAPRES, aunque ello implique un perdono o un salvataje. Y concentrarse en una agenda de seguridad, que debería ser despacha de manera expés en los próximos meses. Y arrendar los salares para que los

explote el sector privado. El fallido plan piloto del gas, desarrollado por ENAP, confirmaría que el estado es un mal empresario y que debe limitarse a recaudar los impuestos.

Este mismo debate, con énfasis muy diferentes, se desarrolla al interior del oficialismo. No sin vehemencia y pasión. Daniel Jadue no duda en afirmar que vivimos “una involución total”. Algunos afirman que se vive una tensión entre el pragmatismo y las convicciones. Y otros temen el retorno el triunfal de la llamada política de los consensos 2.0.

Con bastante más realismo, el gobierno asume que debe negociar todas y cada una de sus reformas emblemáticas. No tan sólo con la cada uno de los sectores de la oposición (incluido los republicanos, el partido de la gente y otros), sino también con los sectores empresariales, que muchas veces son más pragmáticos que los políticos, tal como quedara demostrado en la discusión de la reducción de la jornada laboral, el nuevo royalty minero o el alza gradual del salario mínimo que, tras una ardua negociación, lograron ser aprobados.

Es un camino largo y difícil, pero el único posible para hacer avanzar las reformas. El gobierno no tiene mayoría parlamentaria, pero tiene el poder institucional que le permite negociar con relativa fuerza. Los empresarios asumen que deben arribar a un nuevo pacto fiscal que permita tener certidumbre y estabilidad respecto de las reglas del juego. E invertir en cohesión para tener paz social. Mal que mal, el estallido social no está tan lejos.

Es más evidente que el problema de las ISAPRES no se resuelve con un perdonazo. Ni menos con un salvataje que implique ayuda estatal. Y que el sistema de salud requiere de una reforma integral, que no excluye al sector privado pero que le entrega o devuelve al estado el principal protagonismo. Y otro tanto sucede con la reforma del sistema previsional.

Y resulta del todo imprescindible cerrar el tema constitucional, so pena de incrementar la polarización política y la agitación social. Un nuevo fracaso no perjudica principalmente al gobierno sino al país y compromete su futuro.

No serán años fáciles los que le restan de mandato al gobierno. Enfrenta múltiples desafíos. Partiendo por el tema de la seguridad y la crisis migratoria, que parecen estar a la base del descontento ciudadano que se expresó en la reciente elección. La crisis migratoria parece ir en remisión, según las cifras entregadas por el gobierno. Sin embargo, es indispensable avanzar sin pausas, aunque con menos prisas, en una robusta agenda sobre la materia,

Sigue pendiente la necesidad de reactivar la economía y recuperar un adecuado ritmo de crecimiento. Es complejo hablar de los desacreditados “brotes verdes” pero claramente se advierten claros signos de recuperación, que deberían consolidarse de cara a este segundo semestre.

No hay verdaderas razones, como no sean las ideológicas, para el pesimismo que se advierte en algunos sectores, alimentados por sectores interesados en proyectar imágenes catastrofistas acerca de la situación que vive el país, que puede compararse muy favorablemente con la que viven otros países en la región. Tanto en el terreno político, como económico y social.

Sin embargo, estos avances, modestos si se quiere, no permiten abrir la champaña o celebrar anticipadamente. Son muchas las cosas que se juegan en el nuevo proceso constituyente. Entre ellas, la urgente reforma del sistema político, que asegure la gobernabilidad futura del país, que pasa por un profundo proceso de renovación política, que incluya una reducción de partidos, renovación de los liderazgos y una nueva forma de pensar y hacer política, buscando reconectarla con la sociedad. Siempre con la mirada puesta en el futuro y los nuevos desafíos que enfrenta el país.

Hoy parece urgente simplificar el mapa político del país. Con procesos de síntesis u otros federativos que busquen agrupar a los pequeños partidos en grandes corrientes de opinión. El presidente de Convergencia Social ha propuesto unificar a los diversos partidos y movimientos que integran el Frente Amplio en un solo partido, de cara a las próximas elecciones municipales, Y un proceso similar deberá impulsar el llamado socialismo democrático, que pudiera materializarse en una federación socialista y democrática, sin descartar la posibilidad de avanzar hacia un amplio frente del progresismo para enfrentar las próximas elecciones.

El gobierno tiene las condiciones para culminar con éxito su mandato. En la medida de lo posible. Y aquello se mide en como recibió el país y como lo entregará. Y tan importante como lo anterior, a quién se lo entregará.

Si el presidente debiera entregar la banda presidencial a José Antonio Kast, sería la mayor prueba de su fracaso y el de su alianza, al que muchos sectores, equivocadamente, apuestan, sin mayor análisis acerca de los riesgos que la ultraderecha llegue al gobierno.

